

ECONOMÍA Y TRABAJO

CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN



El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, ayer en una conferencia de prensa conjunta en Bruselas tras anunciarse el acuerdo. / JOHN THYS (AFP)

La pandemia da a luz una nueva Europa

La Unión se endeudará de forma masiva por primera vez en su historia para financiar la recuperación

BERNARDO DE MIGUEL / LLUÍS PELLICER
Bruselas
 Acuerdo. La Unión Europea pactó a las 5.30 de la madrugada de ayer el mayor salto en su modelo presupuestario desde

que hace 30 años estableció sus presupuestos para siete años y dobló los recursos destinados a la cohesión. Los 27 socios de la Unión, por unanimidad, acordaron establecer un fondo de reactivación para

paliar los daños económicos de la covid-19 dotado con 750.000 millones de euros y un marco financiero para 2021-2027 de más de un billón de euros. Por primera vez en la historia de la UE, las subvencio-

nes se financiarán con emisiones de deuda conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal.

"Deal". Con este breve tuit, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciaba el acuerdo tras cinco días de cumbre. A partir de ahí se desataba una cascada de reacciones tanto en la capital europea como en la española, que colocaban el énfasis en el alcance del pacto logrado. En muchas intervenciones, como en la del presidente francés, Emmanuel Macron, asomaba un adjetivo muy usado en días así: "Histórico".

El fondo nace tras la fiera resistencia de un pequeño grupo de países, liderado por el primer ministro holandés, Mark Rutte, que durante cuatro días y cuatro noches intentó reducir todo lo posible la ambición de las propuestas presupuestarias y someter las ayudas a un derecho de veto que podría inutilizarlas. Aparte del reflejo austero, los Países Bajos y sus aliados —Suecia, Austria y Dinamarca— temían, sobre todo, que se abriese camino a la emisión de deuda para financiar subvenciones. Un precedente que los autodenominados frugales no han logrado evitar.

Las larguísimas negociaciones, no exentas de tensión y roces entre los socios, se saldaron con un pacto que recorta en parte el programa de subvenciones

de medio billón de euros propuesto por la Comisión Europea, pero mantiene una potencia de tiro considerable y evita la amenaza de veto de cualquier capital. Y marca un hito en la evolución presupuestaria de la UE que será muy difícil de obviar en el futuro, sobre todo ante crisis de magnitud como la de la provocada por la pandemia, con las mayores caídas del PIB desde la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de la envergadura financiera de la reacción comunitaria, la gran trascendencia del pacto estriba en el diseño de un fondo sin precedentes. Por pri-

mera vez en su historia, la Unión Europea se endeudará, y de manera masiva además, para lanzar un plan de subvenciones y créditos destinado a paliar el impacto de la crisis desencadenada por la covid-19 y para mitigar el riesgo de fragmentación económica entre los socios comunitarios. "Es el acuerdo económico más importante desde la creación del euro", señaló el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

El precio para lograr el pacto ha sido elevado. Y no solo en términos de esfuerzo y recursos humanos, con una cumbre europea

que se prolongó desde las 10 de la mañana del pasado viernes hasta la madrugada de ayer, sino de valiosas concesiones políticas a unos socios y otros para llegar a la unanimidad.

Las contrapartidas

La factura más tangible ha sido el mantenimiento de los llamados cheques, los descuentos en la contribución al presupuesto comunitario que inauguró el Reino Unido y que la Comisión Europea pretendía extinguir tras el Brexit. El acuerdo los mantiene para cinco de los contribuyentes netos —Alemania, Países Bajos, Suecia, Aus-

tria y Dinamarca— e incluso los amplía. La rebaja ascenderá a 52.000 millones de euros durante los próximos siete años. Los cuatro frugales se ahorrarán 27.000 millones, con La Haya apuntándose la mitad, 13.500 millones. Los frugales arrancan ese privilegio a pesar de que, según Bruselas, figuran entre los principales beneficiarios del mercado interior.

Menos visible, pero mucho más preocupante para muchas fuentes comunitarias, es la renuncia a un control estricto del respeto al Estado de derecho en la gestión de los fondos comunitarios. La iniciativa había sido impulsada desde hace meses por el Gobierno de Angela Merkel, entre otros, como reacción a las sospechas de enriquecimiento a costa del presupuesto de la UE que pesan sobre algunos oligarcas de Europa central vinculados a los políticos en el poder. Pero el mecanismo de vigilancia se ha descafeinado para no provocar el rechazo de socios como la Hungría de Viktor Orbán. Días antes de la cumbre, Alemania, que asumió el 1 de julio la presidencia semestral de la UE, dejaba claro que la prioridad era aprobar los planes de recuperación aún a costa de sacrificar ciertos objetivos, como el del mecanismo del Estado de derecho.

Obstáculos a las ayudas

Las concesiones más ligadas al fondo se han logrado evitar en parte. El holandés Mark Rutte reclamaba un derecho de veto para liberar las ayudas a los países que no hagan las reformas para las que reciban financiación. La propuesta generó el rechazo de los socios, que temían la parálisis del fondo, y de la Comisión, que veía invadidas sus competencias.

El acuerdo prevé la aprobación de los planes nacionales de reforma por mayoría cualifi-

cada, es decir, sin derecho de veto. Y la evaluación para autorizar el desembolso dependerá de la Comisión, previa opinión del Comité económico y financiero (donde se sientan técnicos de los Ministerios de Economía de los 27). Si uno o más miembros de ese comité planteara objeciones, el expediente podría elevarse al Consejo Europeo, que dispondrá de tres meses para pronunciarse. La Comisión se da por satisfecha con esa solución porque

no establece un veto directo, sino una fórmula para parar el reloj. La decisión final siempre se adoptará por mayoría, sin veto, tras el pronunciamiento de los líderes de la UE. Y si el Consejo no se pronuncia en el plazo previsto, el expediente seguirá su trámite y la última palabra volverá a la Comisión. El mecanismo no genera tanta incertidumbre como el propuesto por Rutte, pero aun así expone los desembolsos a una intervención política del Consejo que, si se pronuncia en contra, podría equivaler a un veto político de facto.